

**PODER JUDICIAL DE TUCUMÁN**  
CENTRO JUDICIAL CAPITAL  
EXCMA. CAMARA DE APELACION DEL TRABAJO SALA 1



HSJUICIO: "SORIA CECILIA NATALIA C/ SUR CONTACT CENTER S.A. Y OTRO  
S/ COBRO DE PESOS S/ INSTANCIA ÚNICA" - EXPTE. N° 1171/13

San Miguel de Tucumán, marzo 5 de 2018.-

AUTOS Y VISTOS: para dictar sentencia definitiva en la causa caratulada: "Soria Cecilia Natalia c/ Sur Contact Center S.A. y otro s/ Cobro De Pesos s/ Instancia única", que tramitara por ante el Juzgado del Trabajo de la II° Nominación, de cuyo estudio

RESULTA:

Que a fs. 08/15 se apersonan las letradas Irma Azucena Salina y Juana Rosa Peñalva, en nombre y representación de Cecilia Natalia Soria –DNI 33.163.856, domiciliada en Pasaje Belisario López n° 1.182 de esta ciudad Capital, de las demás condiciones personales que constan en el poder ad-litem que obra a fs. 70. En el carácter invocado promueven demanda en contra de SUR CONTACT CENTER SA – AEGIS ARGENTINA SA –CUIT n° 30-70984936-7, con domicilio sito en calle Juan Bautista Alberdi n° 165 de San Miguel de Tucumán y en contra de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA, con domicilio en Av. Ingeniero Huergo n° 723, Planta baja, Ciudad Autónoma de Bs. As. Persiguen el cobro de la suma total de \$64.994,17 (pesos sesenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro con diecisiete centavos) en concepto de diferencias de: haberes Julio, agosto 2011, 17 días de septiembre/2011, integración mes de despido, SAC 2do. semestre/2010 y SAC 1° semestre/2011, SAC sobre vacaciones, indemnización sustitutiva de preaviso, SAC/preaviso, indemnización por antigüedad, indemnización arts. 1 y 2 de la Ley 25.323 y multa art. 80 de la LCT, conforme planilla que adjuntan, o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, más sus intereses a tasa activa del Banco de la Nación Argentina, gastos y costas.

Denuncian que su mandante ingresó a prestar servicios para la empresa Sur Contact Center SA el 07/07/2008, ubicada en calle Alberdi n° 165 de esta ciudad, realizando en forma ininterrumpida la actividad de Operadora Telefónica. Sus tareas consistían en la atención de llamados de los clientes de la empresa Telefónica Argentina, efectuados al número 112 de servicio de atención comercial. Explican que la actora evacuaba consultas tales como activación o modificación de clave de gestión personal, lugares de pago de facturas, gestiones administrativas y comerciales y reclamos de usuarios sobre las líneas de esa empresa; excepcionalmente, por expresas instrucciones de la empleadora, cuando el personal afectado a las ventas estaba sobrepasado, la actora efectuaba llamadas, conforme programas de computación prefijados, a distintos puntos del país ofreciendo banda

ancha de Internet de la empresa Speedy, perteneciente al grupo de Telefónica Argentina SA.

Añaden que en función de las tareas desplegadas, la actora quedaba encuadrada en el CCT n° 201/92 de empleados Telefónicos, en la categoría de: “Oficial Servicios al Cliente/Post Venta”. La jornada de trabajo cubierta por la actora era de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs. y percibía los montos mensuales que surgen de los recibos de haberes que acompañan, mediante depósito bancario (Banco Río), en una cuenta a su nombre

Manifiestan que los salarios percibidos no se ajustaban a la escala salarial del CCT aplicable a la actividad (CCT 201/92), puesto que eran liquidados de acuerdo a la escala salarial establecida para un “Vendedor B” del CCT 130/75 de empleados de comercio, que no correspondía aplicar dada la actividad normal y habitual de la trabajadora, que consistía en servicios al cliente post –venta especializado, más no venta. Aducen, en consecuencia, un erróneo encuadramiento sindical.

En cuanto al distracto, señalan que luego de una licencia por enfermedad, obtenida el alta médica, en fecha 16/09/11 la actora se presentó a prestar servicios en la empresa, en su horario habitual, y en esa oportunidad le informaron que no tenía tarea porque se había dispuesto su despido. Esto motivó que la Srta. Soria enviara un TCL (CD568119069) en igual fecha, intimando tanto a que se aclare su situación laboral bajo apercibimiento de considerarse injuriada y despedida, como a que se registre correctamente su relación laboral según CCT 201/92.

El 16/09/11 la empleadora remitió carta documento, notificando el despido sin causa y el 20/09/11 cursó otra misiva, dando respuesta a la intimación recepcionada, individualizada en el párrafo precedente.

Atento a que la patronal depositó en la cuenta bancaria de la actora en concepto de indemnización y liquidación final, una suma no ajustada a la escala salarial del CCT 201/92, el 29/09/11 remitió nuevo TCL – CD167965375- intimando al pago de las diferencias, reclamo que fuera formalmente rechazado, por carta documento del 30/09/11.

Expresan que la conducta asumida por la demandada determinó que su mandante interpusiera denuncia ante la Secretaría de Estado de Trabajo, Expte. 10158/181-S-2011. Llevada a cabo la audiencia la empleadora negó la legitimidad de los reclamos.

Afirman que luego de vencido el plazo para la entrega de la documentación del art. 80, el 11/11/11 su conferente cursó la intimación pertinente. La empleadora manifestó ponerla a disposición sin hacer efectiva la entrega. Advierten que, el incumplimiento de esta obligación se desprende de la fecha de la baja, que se cristalizó el 07/03/13, según constancia de AFIP que acompañan.

Practican planilla de liquidación de rubros reclamados, refieren a la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la LCT, y piden que se aplique la tasa activa de interés con apoyo en sendos argumentos que exponen en ese apartado de la demanda, a los que hago remisión en honor a la brevedad.

Invocan el derecho aplicable, puntualmente el CCT 201/92; aluden a la responsabilidad solidaria de la codemandada Telefónica Argentina SA en los términos del art. 30 de la LCT y citan jurisprudencia en respaldo de su posición.

Finalmente sostienen la procedencia de las multas previstas por los arts. 1 y 2 de la Ley 25.323.

Concluyen peticionando se admita la demanda en todas sus partes con costas.

Por presentación obrante a fs. 71, la parte actora acompaña la documentación original que da cuenta la nota actuarial de fs. 72, y las copias simples que obran a fs. 19/63.

- Por decreto del 22/08/13 se dispone correr traslado de la demanda.

- A fs. 90/99 se presenta el letrado Javier López Dominguez en representación de la demandada SUR CONTACT CENTER SA y de su continuadora AEGIS ARGENTINA SA, conforme poder general para juicios que acompaña (fs. 79/89) y contesta demanda.

Formula una negativa general y particular de los hechos invocados por la actora, reconoce los recibos de sueldo, la constancia de baja de AFIP, la emisión y recepción de los telegramas y cartas documento intercambiadas entre su mandante y la actora.

Seguidamente expone su versión de los hechos. Admite la relación laboral habida con la actora y afirma que su mandante es un call center radicado en la provincia de Tucumán, con más de 400 empleados en relación de dependencia, todos inscriptos en forma. Reconoce la fecha de ingreso denunciada por la actora, y sostiene que la misma estuvo debidamente registrada como “vendedor B” según la nomenclatura del CCT 130/75.

Señala que la actora siempre percibió una remuneración acorde a la escala salarial de la actividad y a su jornada de 30 horas semanales, de 6 horas diarias, de lunes a viernes, que no superaba las 2/3 partes de la jornada habitual de 48 hs. semanales, conforme lo establece el art. 92 ter de la LCT.

Denuncia que las tareas de la accionante consistían en recibir llamados de reclamos de algún cliente molesto con algún servicio de TELEFÓNICA pero que también tenía que hacer llamadas para vender productos de esa empresa como de otros clientes de su mandante, tales como el BBVA Banco Francés, Claro, LAN, EDENOR etc.

Aclara que su representada es una empresa que ofrece servicios de publicidad, marketing y call center para diversas y distintas empresas, lo que descarta la solidaridad de Telefónica pretendida por la demandante.

En cuanto a la extinción del vínculo laboral, expresa que en fecha 16/09/11 se dispuso el despido de la actora sin causa y se le abonó íntegramente las indemnizaciones derivadas del distracto, con el fin de evitar un reclamo posterior, sin perjuicio de lo cual, en fecha 29/09/11 su mandante recibió una intimación por diferencias salariales e indemnizatorias.

Relata que con posterioridad a la recepción de aquella intimación, el empleador puso a disposición la certificación de servicios sin que se la actora se presentara a retirarla, incurriendo la misma en mora accipiens.

Por todo ello, pide se rechace la demanda.

Luego expone sobre la improcedencia de la solidaridad reclamada, alegando que sólo existe una relación comercial entre las dos empresas demandadas, sin que exista subcontratación de personal, transferencia o cesión de establecimiento.

Destaca que su mandante es una empresa autónoma y que la trabajadora prestaba servicios para otros de sus clientes además de TELEFÓNICA. Cita jurisprudencia en sustento de su posición.

Con respecto al encuadramiento convencional, pide se aplique el CCT 130/75, puesto que el CCT 201/92 es un convenio de empresa cuyo ámbito de aplicación personal no puede superar al de las empresas signatarias del mismo, que son: una federación sindical y dos empresas privadas, entre las que no se encuentra su representada. Analiza la jurisprudencia citada por el actor y afirma que no son aplicables al caso.

En cuanto a la tasa de interés pide la aplicación del caso “Galletini” para actualizar la hipotética sentencia que su mandante pudiera sufrir en contra, por considerar que el planteo de la tasa, es una cuestión de hecho y prueba con la que carga la actora.

Impugna planilla. Reitera que la base salarial según CCT 201/92 tomada por el accionante para cuantificar el reclamo resulta inaplicable, puesto que en el caso rige el CCT 130/75. Asimismo afirma que la actora estuvo correctamente registrada, de

acuerdo a su fecha de ingreso y remuneración y que, por ello, no concurre el presupuesto de hecho de la multa del art. 1 de la Ley 25.323. Destaca que se trata de un conflicto de encuadramiento convencional y que ello no se condice con la naturaleza del tipo impuesto por esa norma. Se opone también a la procedencia de la multa del art. 2 de la Ley 25.323 por cuanto su mandante si abonó las indemnizaciones derivadas del despido en tiempo y forma.

Plantea la prescripción de la acción por diferencias salariales desde septiembre de 2009 hasta septiembre de 2011. Alega que la actora intimó al pago de ese concepto por telegrama obrero n° 81072928 remitido el 29/09/11, sin explicar en que sustentaba el reclamo. Esa intimación ha sido rechazada por su mandante, sin que la actora cursara otra. Así, considera que la interpelación realizada por la actora no produjo efectos suspensivos de la prescripción por no reunir los requisitos necesarios para ello.

Solicita plazo legal para agregar documentación y finaliza solicitando que se rechace la demanda con costas.

- Corrido traslado de la excepción de prescripción, la parte actora contesta a fs. 103/104 oponiéndose a su progreso. Manifiesta que a contrario de lo afirmado por la demandada, el telegrama de fecha 29/09/11 se ajusta a lo dispuesto por el art. 3.986 del CC, que por lo tanto produjo los efectos suspensivos de la prescripción.

- Por presentación obrante a fs. 150 la demandada adjunta la documentación original que da cuenta la nota actuarial de fs. 151, y las copias obran a fs. 106/149.

- A fs. 166/171 se presenta el letrado Eduardo Enrique Palacio (h) en representación de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA (en adelante TASA) y contesta demanda.

Luego de una negativa general y particular de los hechos invocados por la parte actora expone su versión sobre los mismos.

Señala que de los términos de la demanda resulta que la actora se encontraba vinculada laboralmente con la empresa SUR CONTACT CENTER SA, habiéndose extinguido el contrato por despido directo sin causa. Agrega que la actora no trabajó en ningún momento para su mandante, resultando por ello, improcedente y errónea su pretensión en contra de TASA.

Destaca que su representada trabaja con otras empresas que tienen su propia organización y personal, que, además, realizan tareas completamente ajenas al objeto social de aquella; la actividad de la accionada no es la correspondiente a la actividad propia y específica de TASA, por lo que se opone expresamente a la aplicación del art. 30 de la LCT.

Cita jurisprudencia sobre el carácter restrictivo de la solidaridad laboral y afirma que de la exposición de los hechos sustento de la demanda no surgen los fundamentos del reclamo intentado en contra de su mandante. La parte actora no precisó ni individualizó el tipo de labores encomendadas al contratista ni tampoco que estas hayan sido propias y específicas del establecimiento comitente.

Por otro lado manifiesta que la actividad de TASA, que tiene sede central en la ciudad de Buenos Aires, se circunscribe a brindar servicio de telefonía fija para lo cual posee la infraestructura necesaria, todo lo cuál es independiente de las tareas desarrolladas por los denominados "call center", que son establecimientos donde se practican actividades totalmente ajenas al objeto social de su mandante. Añade que no existe subordinación jurídica, económica ni técnica entre la empresa CONTACT CENTER SA y TASA.

Niega que su representada haya mantenido vínculo alguno con la actora, quién, además, nunca formalizó reclamo alguno en su contra.

Reitera que ambas empresas realizan actividades diferentes y que por todo ello resulta improponible la atribución de responsabilidad ensayada en contra de su mandante con fundamento en el art. 30 de la LCT.

Impugna planilla y con respecto a la multa del art. 2 de la Ley 25.323 señala que se la actora pretende obtener una sanción por falta de pago de quién no es titular de la relación laboral, lo que es irrazonable y violatorio de los arts. 17 y 18 de la CN.

Pide que se aplique el tope establecido por el art. 245 de la LCT, conforme jurisprudencia que cita.

Hace reserva del caso federal y pide que se rechace la demanda con costas.

- Por decreto del 04/11/14 (fs. 180), se dispuso abrir la causa al sólo fin de su ofrecimiento.

A fs. 198 obra acta de celebración de la audiencia prevista por el Art. 69 de la Ley N° 6.204, según la cual las partes no arribaron a ningún acuerdo conciliatorio.

A fs. 412 obra informe actuarial según el cual las partes ofrecieron y produjeron las siguientes pruebas: Parte actora: 1) Instrumental: producida (fs. 201/203). 2) Informativa: producida (fs. 204/253). 3) Testimonial: parcialmente producida (fs. 254/301). 4) Absolución de posiciones: producida (fs. 302/313). 5) Exhibición: producida (fs. 314/335). 6) Informativa: no producida (fs. 336/342). 7) Informativa: producida (fs. 343/364). La demandada: 1) Instrumental: producida (fs. 365/375). 2) Pericial Contable: no producida (fs. 376/391). 3) Informativa: no producida: (fs. 392/411).

A fs. 416/422 obran alegatos presentado por la parte actora y a fs. 424/426 glosan alegatos de la demandada SUR CONTACT CENTER. La codemandada TASA no presentó alegatos, según decreto del 02/11/16 de fs. 430.

Radicada las causa ante esta Sala I de la Cámara del Trabajo y notificada su integración con los Dres. Rogelio Andrés Mercado y María del Carmen Dominguez, como Vocales preopinante y conformante respectivamente, por decreto del 07/08/17 se llaman los autos a conocimiento y,

CONSIDERANDO:

VOTO DEL VOCAL PREOPINANTE ROGELIO ANDRÉS MERCADO:

I.- Conforme los términos en que ha quedado trabada la litis, constituyen hechos reconocidos por las partes y exentos de prueba: a) el contrato de trabajo que vinculó a la actora con la demandada SUR CONTACT CENTER SA que una empresa de "call center"; b) los extremos del contrato de trabajo: fecha de ingreso: 07/07/2008, jornada de trabajo: 30 horas semanales, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hs., categoría profesional de la trabajadora: "Vendedor B" según CCT 130/75, la remuneración percibida y devengada conforme escala salarial del CCT 130/75, establecida para dicha categoría; c) el despido directo sin expresión de causa dispuesto por la empleadora, notificado por CD Andreani n° 6900711-5 y operado el 21/09/11, fecha de recepción de la misiva rupturista cuya copia obra a fs. 108, d) el pago de la suma total de \$10.767.17 abonado por la empleadora a la trabajadora el 12/09/11 en concepto de sueldo, acuerdos no remunerativos, licencia por enfermedad, antigüedad, rubros indemnizatorios y demás conceptos previstos por la LCT, con motivo del despido directo e incausado, cuyos montos y conceptos se encuentran detallados en el recibo de haberes obrante a fs. 112; e) la vinculación comercial existente entre las codemandadas SUR CONTACT CENTER SA (hoy AEGIS ARGENTINA SA) y TELEFÓNICA SA, y f) el intercambio epistolar cursado entre las partes.

En su mérito, propicio tener por acreditados aquellos hechos, por auténticos los despachos telegráficos cursados por las partes y demás documentos ofrecidos como prueba documental, en cuanto no fueron objeto de oportuno desconocimiento (cfr. art. 88 del CPL) y a tenor de lo informado por el Correo Oficial a fs. 235.

La demandada SUR CONTACT CENTER SA ha reconocido expresamente la autenticidad de los recibos de haberes y de las misivas acompañadas con la demanda y la parte actora.

En cuanto a la fecha del distracto, cabe aclarar que pese a que la actora manifiesta en su TCL N° CD167965375 29/09/11 (fs. 22), haber recepcionado la carta documento del despido el 20/09/11, del cuerpo del instrumento telegráfico se desprende que la misiva fue recepcionada el 21/09/11, por lo tanto y, de acuerdo a la teoría recepticia que rige en la materia, el distracto se produjo en esta última fecha. Así lo declaro.

Asimismo debo señalar que los litigantes no controvierten sobre la jornada laboral que cumplía la trabajadora, ni sobre la modalidad de “contrato de trabajo de jornada reducida” celebrado entre la actora y su empleadora SUR CONTACT CENTER SA, y por lo tanto se trata de hechos no discutidos. Así se declara.

II.- En consecuencia, las cuestiones controvertidas y de justificación necesaria sobre las cuales este Tribunal deberá pronunciarse, son las siguientes: 1) El encuadramiento convencional de la actora y la correcta registración. 2) La procedencia de las diferencias salariales e indemnizatorias y demás rubros reclamados. Prescripción de la acción por diferencias salariales. 3) La responsabilidad solidaria de la codemandada Telefónica de Argentina SA. 4) Intereses. Planilla. Costas y honorarios.

A fin de resolver los puntos materia de debate, se analizarán las probanzas arrojadas a la causa, a la luz de la sana crítica y de lo prescripto por los Arts. 32, 33, 40, y cctes. del CPCCT supletorio, sin soslayar que con sustento en el principio de pertinencia, el juez puede limitar su examen solamente a aquella prueba que considere conducente a tal fin, máxime considerando que el eje central del debate está referido al encuadramiento convencional de la trabajadora.

Pruebas de la parte actora:

Instrumental: 06 Telegramas Ley N° 23.789; 05 Cartas Documento; 03 Telegramas OCA; actuaciones ante la Secretaría de Estado de Trabajo de Tucumán en 04 fs.; Constancia del Trabajador "Baja" en 02 fs.; Talón comprobante de Retiro de Efectivo de fecha 26/09/2011 en 01 fs.; Ecografía Abdominal con Informe Médico en 02 fs.; Análisis Bioquímico en 06 fs.; Recibos de haberes en 24 fs. (fs. 37/70).

Informativa: Expte. 986/180-G-15 remitido por la SET (fs. 214/233). A fs. 235/242 obra informe del Correo oficial sobre la autenticidad y fechas de recepción de las piezas postales enviadas por la actora. A fs. 244/247 obra escala salarial remitida pro SEOTTUC (Sindicato de Obreros y Empleados Telefónicos de Tucumán). A fs. 249/251 obra informe de AFIP sobre aportes y contribuciones de la actora.

Testimonial: a fs. 254 la actora ofrece prueba testimonial a fin de que los testigos propuestos respondan sobre las tareas, horarios que cumplía la actora a favor de SUR CONTACT CENTER SA.

- Según acta de fs. 273 compareció como testigo Verónica Carolina Galván, y respondió a tenor del interrogatorio propuesto. Dijo no estar comprendida en las generales de la ley. Que fue compañera de trabajo de la actora en la empresa Sur Contact Center y que trabajaban para Telefónica Argentina. Que trabajaban en calle Alberdi n° 165 San Miguel de Tucumán. Que la actora trabajaba en atención al cliente de Telefónica Argentina, atención del 112, atención de reclamo, facturación, venta de servicios, todo lo relacionado a Telefónica Argentina, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. Afirmó que Sur Contact prestaba los servicios de call center para Gasnor y otras más, pero que en julio de 2008 sólo tenía de cliente a Telefónica.

- Según acta de fs. 274 compareció como testigo Ivana Soledad Fernandez, dijo no estar comprendida en las generales de la ley y haber sido compañera de trabajo de la actora. Sobre las tareas de la Srta. Soria dijo que: “ella era operadora del 112, yo

era su líder en ese período de tiempo” (período en que trabajo la actora). “Ella atendía los reclamos del 112 de Telefónica. Ella estuvo para Telefónica, hubo otras empresas, pero ella estuvo solo para Telefónica. Dijo que primero, en 2008, sólo Telefónica era cliente de Sur Contact, más o menos por dos años, y después entraron empresas como Cablevisión, Banco Francés, Banco Galicia, Claro, Edenor. A LA DIEZ: Uno solo, Telefónica.

Confesional: según acta de fs. 313 compareció Augusto Sosa como representante legal de Sur Contact y contestó a tenor del pliego de fs. 307. Reconoció que la actora estuvo afectada desde su ingreso a la atención de la línea 112 de Telefónica argentina. Dijo no recordar si al ingreso la actora sólo prestaba servicios para Telefónica pero aseguró que había otros clientes. Negó la falta de entrega de certificación de servicios a la actora.

- Exhibición de documentación: la demandada Sur Contact, debidamente intimada, ha omitido exhibir la documentación laboral y contable requerida y detallada en el ofrecimiento de fs. 314.

Pruebas de la demandada:

Instrumental: 02 Telegramas Ley N° 23.789; 04 Cartas Documento c/04 avisos de recibo; copias simples en 04 fs.; Certificación de Servicios y Remuneraciones en 03 fs.; Seguro de Vida Obligatorio en 03 fs.; nota de fecha 08/10/2010 en 01 fs.; nota de fecha 22/10/2009 en 01 fs.; nota de fecha 22/12/2008 en 01 fs.; nota al personal en 01 fs.; 01 legajo en 25 fs (fs. 106/149).

La parte actora impugna algunos documentos acompañados con la contestación de la demanda, que puntualiza en su presentación de fs. 368, desconociendo el contenido de los mismos por carecer de firma atribuible a su mandante.

Sin perjuicio de la extemporaneidad del planteo -según lo dispuesto sobre la oportunidad para deducir impugnaciones por el art. 88 inc. 2 del CPL- y de su consecuente rechazo, es dable poner de manifiesto que la falta de firma de la actora en la constancia de Baja de AFIP y en los cuadros de publicidad, no invalida sin más dichos documentos. Los documentos no se reducen a instrumentos firmados, sino que comprenden también aquellos “objetos” (fotografías, publicidades, etc.) que tiene aptitud representativa. Por lo tanto, no resulta viable cuestionar la validez de instrumentos representativos por el sólo hecho de no haber sido firmados por la actora, a quién, además no se los atribuye.

No existen en la causa otras pruebas para resolver el debate

#### PRIMERA CUESTIÓN:

El encuadre convencional de la actora:

La plataforma fáctica detallada precedentemente permite sostener que el eje central del debate versa sobre el encuadramiento convencional de la actora; en esa cuestión tiene sustento el reclamo de cobro de diferencias salariales e indemnizatorias impetrado por la trabajadora.

El tema del encuadre convencional gira en torno a establecer si un determinado trabajador, sector o grupo de trabajadores, queda comprendido dentro del ámbito personal o profesional de aplicación de un convenio colectivo de trabajo, de acuerdo a la representatividad de tienen las partes signatarias del acuerdo respecto de aquel o aquellos.

En el caso, la actora que estuvo categorizada como empleada de comercio, bajo la órbita del CCT 130/75, pretende un encuadre convencional en el CCT n° 201/92 de empleados Telefónicos, en la categoría de: “Oficial Servicios al Cliente/Post Venta”, a partir de las tareas que realizaba y del destinatario final de las mismas -

TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA- comitente de su empleador.

En la causa no está discutido que la demandada – SUR CONTACT CENTER SA- es la titular de la relación laboral, es decir la empleadora de la actora y que esa empresa despliega la actividad de “call center”.

Las circunstancias apuntadas exigen reiterar que para determinar cuál es la convención colectiva de trabajo en la que queda subsumida una relación laboral, debe tenerse en cuenta el ámbito personal de aplicación personal que está dado por la representatividad de los respectivos firmantes, ya que ningún empleador queda obligado por un convenio si no intervino por el sector patronal, una asociación profesional o al menos un grupo de empleadores de la actividad’ (CNTrab., Sala V, 30/3/1990, publicado en DT, 1990-A 1201).

Esta Sala en anteriores pronunciamientos ha sostenido sobre este tema que: “Al respecto, nuestra Corte Suprema de Justicia local ha dicho recientemente (Sala en lo Laboral y Contencioso Administrativo, autos: “Mirabella Claudia Karina vs. Citytech S.A. y otra s/ Cobro de pesos”, sent. n° 1023/2015, del 02.10.15) que se debe acreditar que la actividad de la empresa empleadora era la correspondiente al convenio colectivo que invoca el trabajador como la representatividad de la accionada en ese convenio, siendo indiferente para su aplicación que el reclamante haya cumplido las tareas previstas en la convención (cfrme. CSJT, “Córdoba, Ramón Antonio vs. Proser S.R.L. s/ Despido”, sentencia N° 553 del 11/8/2004), y más recientemente, que “el alcance personal de las convenciones colectivas de trabajo se basa en una suerte de ‘representación objetiva’, que hace referencia a la actividad empresarial; de manera que, sobre la base de la actividad empresarial acreditada en cada caso concreto, debe analizarse si la empleadora estuvo representada en la concertación del convenio colectivo, como exigencia para su acatamiento y su aplicación en el caso puntual (cfr. Ackerman, Mario E. -Director-, “Tratado de Derecho del Trabajo”, Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2007, Tomo VIII, “Relaciones Colectivas de Trabajo”, págs. 367 a 374).

Incluso, se sostiene que para fijar el ámbito de aplicación de un convenio colectivo no basta verificar la representación que al concertar este hubiera tenido el sector gremial, sino que también debe analizarse la representación de la parte empresarial, ya que la extensión del ámbito de aplicación del convenio surge de la concordancia entre las representaciones que legítimamente pueden atribuirse las partes que lo celebran (cfr. Rubio, Valentín, “Convenciones Colectivas de Trabajo”, Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2001, pág. 191 y 192)” (CSJT, “Jiménez, Mario Salvador vs. Falivene Constructora S.R.L. s/ Cobro de pesos”, sentencia N° 81 del 02/3/2012), y lo que conoce como la ‘primacía de la convención competente’, lo que depende de ‘clarificar la representación de las partes, gremial y empresarial, según la personería gremial otorgada y la representación concedida a cada una de ellas’. Y establecida de tal modo la norma convencional aplicable, esta desplaza a las otras posibles, aún cuando sean más favorables para el trabajador, ya que la representación efectiva de los sujetos en el pacto colectivo nunca es un elemento indiferente al momento de definir el CCT aplicable (cfr. Arese, César, “Derecho de la Negociación Colectiva”, Rubinzal-Culzoni Editores, Sta. Fe, 2008, pág. 398 y 409)”. (“Díaz Ceballos Gisella Vs. Atusa S.A. y otro S/ Cobro de pesos” Expte. 2160/12, sentencia del 28/04/17; “Cáceres, Judith Karina C/Atusa SA S/Cobro de pesos” Expte. N° 1065/13, sentencia del 23/08/17 entre otras).

En otras palabras, el convenio colectivo aplicable a una situación de trabajo individual depende de la configuración de la actividad principal desarrollada por la empleadora y de la representatividad de esta en el mismo por su actividad, a través de las cámaras, centros y otras entidades representativas de sus intereses, conforme el principio básico que emana de la ley 14.250.



La jurisprudencia nacional ha resuelto que 'no corresponde considerar que basta la utilización de servicios y/o programas de telefonía para encuadrar la prestación laboral en las disposiciones del Convenio de la Actividad Telefónica, en tanto en el caso, la actividad principal del empleador está constituida por la prestación de servicios en un call center destinado a la atención telefónica de los clientes de terceros, por lo que no resulta alcanzada por las previsiones del convenio de los trabajadores de dicha actividad (Telefónica) en la medida en que no es una empresa prestataria de dichos servicios.' (CNAT, "Gatica Raúl A. vs. Teletech Argentina SA s/ Despido"- sentencia del 30.3.12)

En esa inteligencia, la demandada SUR CONTACT CENTER SA (hoy AEGIS ARGENTINA SA) no es una empresa de telefonía, no estuvo representada y no queda comprendida en el marco del CCT 201/92. En efecto, la Resolución N° 1757/2010 del Ministerio De Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, homologatoria de dicho convenio colectivo (n° 201/92), establece que se encuadrarán en el mismo a trabajadores representados por la FOEESITRA; de aquella surge que el acuerdo tuvo como partes intervinientes a la entidad gremial hoy denominada Federación de Obreros Especialistas y Empleados de Los Servicios e Industrias de las Telecomunicaciones de La República Argentina (Foeesitra) por un lado y por el otro, a la empresa Telecom Argentina Sociedad Anónima y otras empresas telefónicas; en función de ello tanto el ámbito personal como el territorial de aplicación de lo pactado, quedan estrictamente circunscriptos a los trabajadores representados por la entidad sindical firmante que se desempeñan en la empresa TELECOM ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA, alcanzados por el convenio citado.

La actividad exclusiva de "call center" de la demandada empleadora, es netamente comercial, ya que brinda servicios comerciales, de marketing o mercadotecnia a diversas empresas, circunstancia que resulta de las manifestaciones de la propia actora y de las declaraciones testimoniales arrimadas a la causa. Que el destinatario contratante de esos servicios haya sido en un primer período sólo Telefónica de Argentina SA, no altera, ni modifica el giro comercial de call center de la sociedad contratada al efecto, y por lo tanto la actividad de la primera no tiene incidencia alguna en el encuadre convencional de los dependientes de la segunda, como pretende la actora. (cfr. CSJT in re: "Zurita Graciela Norma Vs. Citytech S.A. S/ Cobro de pesos", sentencia n° 324 del 15/04/2015).

Tanto de los hechos expuestos en la demanda como de la probanzas aportadas por la actora se colige que la misma pretende un encuadramiento sindical y convencional propio de los empleados telefónicos, a partir de un esquema o modelo de representación horizontal -es decir: por oficio, profesión o categoría-, que no tiene correlato con el ámbito de representación sindical ni con el ámbito de aplicación del CCT 201/92 pretendido.

En síntesis, puesto que SUR CONTACT CENTER SA no participó, ni suscribió aquel convenio colectivo no corresponde aplicar tales estipulaciones a su personal. Dicha demandada contrató a la Srta. Soria para tareas específicas de su actividad (telemarketing, mercadotecnia y atención del cliente), dentro de una estructura y establecimiento propio, sin encontrarse discutido que ella era quien realmente dirigía su prestación, abonaba el salario y ejercía los poderes propios de un empleador. Por todo lo expuesto esta Vocalía propone el rechazo de la aplicación del CCT 201/92 pretendido por la actora, resultando aplicable el CCT 130/75, según lo considerado. Así lo declaro.

Asimismo, en un todo conteste con lo tratado, encontrándose expresamente reconocida la vinculación laboral que existió entre la actora y su SUR CONTACT CENTER SA, cada uno de los extremos de los contratos de trabajo: fecha de

ingreso, jornada laboral, tareas, remuneración percibida y devengada, conforme a su categoría de “Vendedor B” prevista en el CCT 130/75 declarado aplicable, resulta que la actora estuvo correctamente registrada, según recibos de haberes aportados a la causa por la actora, que en copia obran a fs. 45/64, constancia de baja de AFIP y copia de certificación de servicios y remuneraciones arrimadas por la demandada empleadora. Todos estos documentos logran desvirtuar la presunción del art. 61 del CPL ante la omisión del empleador de exhibir la documentación laboral correspondiente a la actora. (fs. 115/118). Así lo declaro.

## SEGUNDA CUESTIÓN:

La procedencia de las diferencias salariales e indemnizatorias y demás rubros reclamados – Prescripción:

Como se señalara el accionante reclama diferencias salariales e indemnizatorias a partir del erróneo encuadramiento convencional invocado. Desestimada la aplicación del CCT 201/92 y la registración deficiente, no existe un crédito a favor de la actora con el alcance pretendido.

2.-1) Diferencias de haberes de julio de 2010 a agosto de 2011, diferencias SAC 2do. semestre/2010 y SAC 1° semestre/2011, diferencia días trabajados en septiembre de 2017, diferencia de indemnización por antigüedad, diferencia indemnización sustitutiva de preaviso, diferencia integración mes de despido, diferencia de vacaciones no gozadas y diferencia de SAC/vacaciones no gozadas. Reclama la actora los siguientes rubros detallados, los que fueron liquidados y abonados conforme a las verdaderas condiciones de la contratación: remuneración, fecha de ingreso, categoría y jornada laboral de la trabajadora, según el detalle realizado en el recibo de haberes obrante a fs. 112/113, por lo que corresponde su rechazo. Así lo declaro.

Cabe destacar que si bien el recibo de liquidación final referenciado no se encuentra firmado por la actora, en la demanda, la misma reconoce expresamente que la accionada SUR CONTACT CENTER depositó en su cuenta sueldo del Banco Río una suma de dinero imputable a los conceptos: liquidación final, haberes devengados e indemnizaciones de ley, acompañando copia del retiro de efectivo de la suma de \$10.770,00 (copia de fs. 40), lo que constituye prueba de pago suficiente a tenor de lo dispuesto por el art. 125 de la LCT.

2.-2) Prescripción: la demandada Sur Contact Center SA opuso excepción de prescripción de la acción intentada por cobro de diferencias salariales. Ante el rechazo de dicho rubro reclamado por la actora, deviene abstracto e inoficioso el tratamiento de esta defensa de fondo, correspondiendo que así se declare.

2.-3) Multa art. 1 Ley 25.323: declarada que fuere la correcta registración de la actora, ajustada a las condiciones de la contratación y al CCT 130/75 aplicable, este rubro resulta no puede prosperar. En el caso no se constató la irregularidad que autoriza a incrementar al doble la indemnización del art. 245 de la LCT (cfr. CSJT, Sentencia N° 472 del 30/06/10 in re: “Toro José Alejandro vs. Bayton S.A. y otro s/ cobro de pesos” mutatis mutandis). Así lo declaro.

2.-4) Multa Art. 2 de la Ley 25.323: esta norma impone una sanción para que el empleador moroso en el pago adecue su conducta -como última oportunidad- a las disposiciones legales y cumpla con sus obligaciones de abonar las indemnizaciones emergentes de la ruptura incausada del contrato de trabajo. Por lo tanto, su procedencia exige que el actor curse una intimación que reúna los siguientes requisitos: que sea expresa, clara, concreta y que se efectúe luego de vencido el plazo de cuatro días hábiles determinados por los Art. 128 y 149 de la LCT para que

el empleador cumpla (CSJT, Olea Ana María vs. Hachem Mónica, sent. N° 292 de fecha 6/08/09, n° 910 del 02/10/2006 y n° 921 del 15/9/2008 entre otras) “El incremento indemnizatorio previsto en el art. 2° de la Ley N° 25.323 no es procedente cuando la intimación que prevé esa norma se efectúa antes de que el empleador se encuentre en mora en el pago de las indemnizaciones de ley” (CSJT, Sala Laboral y Contencioso Administrativo, Sentencia N° 660 del 04/09/13, Mainero, Raúl Marcelino vs. Alcántara, Ramón Ángel s/ cobro de pesos).

En el caso el despido directo e incausado se produjo el 21/09/11, el depósito bancario de la suma de \$10.767,17 en la cuenta sueldo de la actora se efectuó el 12/09/11, como se declarara, por lo que no hubo mora del empleador en los términos de la norma analizada. La interpelación cursada el 29/09/11 – TCL n° CD 167965375 (fs. 22) alude a las diferencias de liquidación final e indemnización de ley, que no son conceptos no adeudados por el empleador conforme lo declarado al tratar la primera cuestión. En su mérito corresponde rechazar este rubro. Así lo declaro.

2.-5) Multa art. 80 de la LCT: según esta norma, cuando el contrato de trabajo se extingue por cualquier causa, el empleador estará obligado a entregar al trabajador un certificado de trabajo y la certificación de servicios y remuneraciones dentro de los dos (2) días hábiles computados a partir del día siguiente al de la recepción del requerimiento que a tal efecto le formulare el trabajador de modo fehaciente, caso contrario será sancionado con una indemnización a favor de este último que será equivalente a tres veces la mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios, si éste fuere menor.

Por su parte, el art. 3° del Decreto 146/01: (Reglamentación del artículo 45 de la ley N° 25.345, que agrega el último párrafo al artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo) dispone que el trabajador quedará habilitado para remitir el requerimiento fehaciente al que se hace alusión en el artículo que se reglamenta, cuando el empleador no hubiere hecho entrega de las constancias o del certificado previstos en los apartados segundo y tercero del artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 (t.o. por Decreto N° 390/76) y sus modificatorias, dentro de los treinta (30) días corridos de extinguido, por cualquier causa, el contrato de trabajo.

La actora ha requerido la entrega de dicha documentación el 11/11/2011, es decir luego de transcurrido el plazo de 30 días de extinguido el vínculo laboral (21/09/11), según da cuenta el TCL n° CD22794162 6 obrante a fs. 23. En respuesta, por carta documento fechada el 15/11/11 (fs. 31), la empleadora rechazó la intimación alegando que las constancias documentadas del art. 80 estuvieron a su disposición en todo momento.

Del texto de la certificación de servicios y remuneraciones surge que la misma fue confeccionada y estuvo en condiciones de ser entregada a la actora el 08/11/11 (fecha de la certificación de firma) ya operado el vencimiento del plazo de 30 días, considerando que el contrato de trabajo se extinguió el 21/09/11.

Ahora bien, “La entrega de los certificados de trabajo (art. 80 de la LCT) al dependiente en oportunidad de la extinción de la relación laboral es una obligación del empleador que debe ser cumplida en forma inmediata a la desvinculación, esto es en el tiempo que razonablemente puede demorar su confección. Y tal obligación no depende de que el propio trabajador se apersona en la sede de la empresa, toda vez que si ello no ocurre, el empleador, previa intimación, puede consignarlos judicialmente...” (CNAT, Sala III, Expte. n° 7058/01, sentencia n° 83170, 11/2/02 – Frazza, María vs. Storto, Silvia y Otro s/ despido. “...En otros términos, no basta que la empleadora argumente que los certificados estuvieron a disposición del actor, sino que es necesario que arbitre los medios para que, ante la falta de retiro de los

mismos por parte del actor, aquélla cumpla con su obligación consignándolos judicialmente...” – CNAT, Sala IX, Expte. n° 27135/02, sentencia n° 11597, 25/6/04, - Cejas, Edgardo vs. CM Administradora SRL s/ despido.

La jurisprudencia ha dicho: “El hecho de que el empleador alegue haber puesto los certificados a disposición del trabajador, no habiéndose este presentado a retirarlos, no obsta a la aplicación de la multa establecida en el art. 80 LCT, pues el demandado pudo haber consignado judicialmente tales instrumentos para evitar colocarse en una situación de mora respecto del cumplimiento de sus obligaciones (CNTrab., Sala IX, 24/2/05, DT, 2005-B-1100, citado por Carlos Alberto Etala, “Contrato de Trabajo. Comentada, anotada y concordada”, p. 298, ed. Astrea, Bs. As., 2011).

Es así que ante la falta de entrega efectiva y oportuna, tanto de la certificación de servicios como del certificado de trabajo, corresponde hacer lugar a la Indemnización prevista en el art. 45 de la Ley 25.345 (incorporado al art. 80 LCT). De acuerdo a las particularidades del caso, la mera puesta a disposición del uno sólo de los certificados previstos por el art. 80 LCT, es insuficiente para demostrar cumplida la obligación prevista en la norma, y no permite considerar que la accionada haya tenido verdadera voluntad de dar cabal cumplimiento con la obligación a su cargo. Por lo tanto este rubro debe prosperar. Así lo declaro.

2.-6) Entrega de los certificados del art. 80: a fs. 14 de la demanda, la actora reclama la entrega tanto de la certificación de servicios como del certificado de trabajo, conforme las reales condiciones de trabajo.

De la nota actuarial obrante a fs. 151 se desprende que el empleador accionado acompañó a la causa, en original, la certificación de servicios y remuneraciones, encontrándose cumplida, aunque extemporánea y parcialmente la obligación de hacer impuesta por el art. 80 de la LCT. Dicho instrumento deberá ser entregado al actor en la etapa de ejecución de ejecución de sentencia.

Por lo tanto corresponde admitir parcialmente esta pretensión, y disponer que el SUR CONTACT CENTER SA haga entrega del certificado de trabajo pertinente, en un plazo de diez días contados a partir de quedar firme la presente resolución, según los extremos del contrato de trabajo aquí determinadas.

2.-7) Art. 132 bis de la LCT: no resulta procedente el reclamo basado en el art. 132bis LCT – introducido por el Art. 43 de la ley 25.345 -, cuando de los hechos expuestos en la demanda y de la prueba producida, no surge evidenciado que la empleadora hubiera omitido ingresar a los organismos de la seguridad social ni a otras entidades, importes que haya retenido de la remuneración del trabajador en concepto de aportes. De modo que, al no verificarse la omisión de depósito de sumas retenidas no resulta viable la pretensión basada en esa disposición legal. CNAT Sala II Expte N° 5.278/06 Sent. Def. N° 95.200 del 30/8/2007 “Núñez, Juan Carlos c/Videla, Angélica Graciela s/despido” (Pirollo – Maza). En el mismo sentido, Sala IV Expte N° 2.257/07 Sent. Def. N° 94.491 del 4/2/2010 “Ríos, Roberto Carlos c/ COTO CICSA s/despido” (Guisado – Ferreirós).

Para que se produzca la sanción que determina el art. 132 bis LCT se deben presentar los siguientes presupuestos: 1) la retención por parte del empleador de los aportes a los que se refiere la norma, 2) la omisión de ingresar en tiempo propio total o parcialmente los mencionados aportes y, 3) dicha omisión debe preexistir al momento de producirse la extinción del contrato. CNAT Sala V Expte N° 31.298/07 Sent. Def. N° 72354 del 10/6/2010 “Pometti, Luis Alberto c/Oracle Argentina SA s/despido” (Zas – García Margalejo).

En el caso, la única prueba arrojada sobre este punto es el informe de AFIP obrante a fs. 249/252 del que se colige que el empleador SUR CONTACT CENTER hoy AEGIS ARGENTINA, ha efectuado los pago correspondientes a los aportes de la

seguridad social y obra social de la actora, desde el inicio al cese de la relación laboral, esto es desde julio de 2008 hasta septiembre de 2009.

Por lo tanto, en la especie no concurre el presupuesto de procedencia de la sanción conminatoria prevista en la norma analizada, la que en su consecuencia se rechaza. Así lo declaro.

2.-8) - Base de cálculo del rubro declarado procedente: el rubro admitido se calcula sobre la base de la remuneración devengada a favor de la actora en agosto de 2011 (fs.64), de acuerdo a la categoría, antigüedad y jornada, con inclusión de las sumas no remunerativas. Ello en orden a los precedentes nacionales “Pérez Aníbal Raúl c/ Disco SA (CSJN, sent. 01/09/2009, Fallos 332:2043), “González Martín Nicolás vs. Polimat SA y otro S/ Despido (CSJN, Sent. 19/05/2010, Fallos 333:699) y “Díaz, Paulo Vicente vs. Cervecería y Maltería Quilmes SA” (CSJN; Sent. 04/06/2013), y lo dispuesto por el Convenio 95 de la OIT aprobado y ratificado por el Dec. Ley 11.549 /56) –norma internacional de grado superior- (que en su Art. 1, reza: “...el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por servicios que haya prestado o deba prestar...”), que concuerdan que los aumentos calificados como “no remunerativos” constituyen una ganancia que está ligada estrechamente a la prestación de servicios, afectando esta calificación el derecho del trabajador a una remuneración “justa” (Art. 14 bis CN) y al derecho de propiedad (Art. 17 ídem); al igual que la doctrina de destacados juristas como Julián de Diego (“La inconstitucionalidad de las prestaciones no remunerativas en sus efectos laborales, previsionales y fiscales” La Ley 2010, D-1167) que sostiene “que...la naturaleza jurídica de las “asignaciones no remunerativas” debe ser definida por los elementos que las constituyen, con independencia del nombre que le asignen los distintos sujetos del Derecho y que, aún cuando el convenio colectivo sea la fuente de tales beneficios, debe realizarse un juicio de compatibilidad...”, entre otros, a lo que se suma y adhiere nuestra Corte local in re “Parra Pablo Daniel vs. Garbarino SAICI s/ Cobro de pesos” (Sent. N° 51 del 11/02/2015) cuyas consideraciones en la temática hago propias y en uso de las facultades conferidas por el Art. 47 de la Ley 6204. Así lo declaro.

Cabe aclarar que dicha base no excede el tope previsto por el art. 245 de la LCT.

### TERCERA CUESTIÓN:

Solidaridad de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA:

Atento a que la demanda progresa por la indemnización el art. 45 de la Ley 25.345, y puesto que el art. 30, 4° párrafo de la LCT dispone que el incumplimiento de alguno de los requisitos allí previstos -deber de exigir y controlar el adecuado cumplimiento de las normas relativas al trabajo y los organismos de seguridad social por parte de sus contratistas o subcontratistas- “hará responsable solidariamente al principal por las obligaciones de los cesionarios, contratistas o subcontratistas respecto del personal que ocuparen en la prestación de dichos trabajos o servicios y que fueren emergentes de la relación laboral incluyendo su extinción y de las obligaciones de la seguridad social”, corresponde analizar la procedencia del reclamo intentado por la actora en contra de la codemandada TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA, con fundamento en el art. 30 de la LCT.

La actora atribuye responsabilidad solidaria a Telefónica de Argentina SA por las obligaciones emergentes del contrato de trabajo, en los términos del art. 30 de la

LCT, sustentando su pretensión en que las tareas que realizaba, las que consistían básicamente en la atención de llamados de los clientes de dicha empresa al número 112, no resulta ajena o extraña al giro comercial de dicha codemandada, sino que deviene esencial para la normal prestación del servicio de TASA. Aclara que los usuarios cuentan con esa vía para canalizar todas las gestiones relacionadas con las prestaciones de la empresa codemandada, evitando que aquellos se vean obligados a acudir personalmente a sus oficinas.

La codemandada en su responde de fs. 166/171 reconoce haber contratado a SUR CONTACT CENTER pero se opone al progreso de la acción intentada en su contra, argumentando al efecto que los servicios prestados por el call center no se corresponden con la actividad normal y específica propia de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA.

Señala que su actividad se circunscribe a brindar el servicio de telefonía fija, para lo cual posee autorización de la autoridad competente y la infraestructura que le permite al cliente obtener su línea y número telefónico personal, lo que es independiente de las tareas desempeñadas por los call centers, que son establecimientos en los que se practican actividades totalmente ajenas al objeto social de su mandante.

Destaca que en caso de que se pruebe que SUR CONTACT CENTER SA haya recibo reclamos de sus clientes, no existió subordinación jurídica, económica ni técnica entre ambas empresas, ya que el call center es un contratante independiente que actúa a su propio riesgo.

Subraya que no debe confundirse la prestación de servicios como es la telefonía móvil a su cargo, con la actividad de atención al cliente desplegada por SUR CONTACT CENTER SA.

La CSJT in re “Jimenez Modesto Nicanor C/ Trading Internacional S.A. y Citrusvil S. A. S/ Cobro de pesos” sentencia n° 29 del 10/02/2016, se ha pronunciado sobre el art. 30 de la LCT en los siguientes términos: “...para que nazca responsabilidad solidaria de una empresa por las obligaciones laborales de otra, en los términos del art. 30 de la LCT, es menester que aquella empresa contrate o subcontrate servicios que complementen o completen su actividad normal. Debe existir una unidad técnica de ejecución entre la empresa y su contratista...” (CSJT, sentencia N° 185 del 26-3-2012, “Carrazana, Antonio Enrique vs. Distri-Ar. S.R.L. y otro s/ Cobro de pesos”). Asimismo, este Tribunal Cívero local expuso: “La Corte Suprema de la Nación, en el fallo ‘Rodríguez, Juan R. c. Compañía Embotelladora Argentina S.A. y otro Rodríguez M. c. Embotelladora’, del 15/04/1993 expresó que los servicios contratados deben corresponder a la actividad normal y específica del principal, y que no obsta a ello la lata formulación del objeto social, pues el art. 30 de la ley de contrato de trabajo no se refiere al objeto ni a la capacidad societaria sino a la actividad real propia del establecimiento. Para que exista la solidaridad del artículo 30 LCT, la actividad contratada por el principal debe estar referida a las actividades del giro normal de la empresa, y conformarse entre ambas una unidad técnica de ejecución.” (CSJT, sentencia N° 964 del 23-10-2006, “Martínez, Manuel vs. Martín, José Manuel s/ Despido”). También es del caso puntualizar que: “...se ha sostenido que la asignación de responsabilidad no ha sido establecida por la ley sin más requisito que la sola noción de que algunas actividades resulten coadyuvantes o necesarias para el desenvolvimiento empresario (CSJN, 02-7-1993, D.T. 1993 -B-). Concordantemente, esta Corte tiene dicho que la expresión utilizada en la referida norma -en una interpretación teleológica- supedita la solidaridad en las obligaciones a que los trabajos o servicios que se contraten sean propios de la actividad normal y específica del establecimiento, o que apareciendo como accesorios sean realmente engranajes imprescindibles para la consecución del objeto social (CSJT: sentencia

Nº 885, del 03-9-2008). En el mejor de los casos, entonces, se habría tratado de servicios concurrentes y coadyuvantes respecto de la ahora recurrente, que únicamente representarían una condición conveniente para su adecuado ejercicio más no ineludible o inescindible para la consecución de los fines sociales del concedente..”.

De lo expuesto se infiere que para determinar la existencia de solidaridad, cabe interpretar en cada caso, a la luz de los hechos y las pruebas acompañadas a la causa, si los trabajos o servicios del contratista corresponden a la actividad normal y específica del establecimiento comitente. En ese sentido la parte actora ha invocado la solidaridad de la codemandada Telefónica. Denuncia que las tareas que efectuaba como dependiente de la empresa de call center, beneficiaba en forma directa a aquella, ya que se dedicaba a recibir los reclamos de sus clientes usuarios, lo que constituye una actividad propia y específica de los servicios que brinda la codemandada y que hacen a su normal funcionamiento.

Los testimonios aportados por Verónica Carolina Galván e Ivana Soledad Fernandez (fs. 273/ 274), quienes fueron compañeras de trabajo de la actora en el call center, permiten corroborar que efectivamente la misma trabajaba en atención al cliente de Telefónica Argentina, atención del 112 de reclamo, facturación, venta de servicios, todo lo relacionado a Telefónica Argentina, de lunes a viernes de 8 a 14 hs. y que Sur Contact Center con el transcurso del tiempo fue incorporando como clientes a otras empresas como Cablevisión, Banco Francés, Banco Galicia, Claro, Edenor, etc. pero esta prueba, ni ninguna otra de las arimadas a la causa, permite inferir que las tareas que cumplía la actora, o bien, la actividad de call center de su empleador, resultaba imprescindible para que TASA pudiera cumplir su finalidad. En mi concepto el servicio de call center luce escindible del servicio de comunicaciones prestado por Telefónica, auxiliar del mismo y no esencial, en tanto la empresa codemandada podría cumplir su cometido comercial prescindiendo de la actividad del subcontratista accionado.

Reitero, el plexo probatorio obrante en la causa resulta insuficiente para considerar que las actividades comerciales de las codemandadas conformaron una unidad técnica de ejecución, condición sine qua non para extender la responsabilidad laboral que asume el empleador como parte del contrato laboral que lo vincula con su dependiente, al tercero comitente que lo ha contratado para realizar actividades que no hacen al normal funcionamiento de su establecimiento.

Existe entre las empresas codemandadas autonomía, cada una asume los riesgos, actuando y gestionando como tales, tiene su propia organización y establecimiento, lo que impide predicar la existencia de una unidad técnica de ejecución capaz de generar responsabilidad solidaria entre ambas, por las relaciones laborales que generó la empresa contratista, producto de su actividad comercial.

En consecuencia cabe desestimar la responsabilidad solidaria de la codemandada TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA en los términos del art. 30 de la LCT, por las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que si vincularon a la actora con la SUR CONTACT CENTER SA.

En mérito a lo expuesto, no encontrándose probado el supuesto de hecho generador de responsabilidad solidaria en los términos del Art. 30 de la LCT, corresponde rechazar la demanda intentada por la actora en contra TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA. Así lo declaro.

CUARTA CUESTIÓN:

INTERESES:

Para el cómputo de los intereses del rubro admitido (indemnización del art. 45 de la

Ley 25.323) se aplica el método de la tasa activa atento la doctrina legal sentada por nuestra CSJT en sentencia n° 1422/2015 del 23/12/2015 "Juárez Héctor Ángel vs. Banco del Tucumán S.A. s/ Indemnizaciones" conforme la cuál el Alto Tribunal ratifica la decisión de abandonar su anterior doctrina sobre la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (confr. CSJT, sentencias N° 937 del 23/09/14, N° 965 de fecha 30/09/14, N° 324 del 15/04/2015, entre otras), y expresa que los jueces deben dictar pronunciamientos de conformidad a las circunstancias existentes al tiempo de su dictado, aunque sean sobrevivientes: "En el contexto de las singularidades del crédito laboral objeto del proceso judicial deducido por el trabajador y de las circunstancias económicas actuales, el mantenimiento incólume del contenido económico de la sentencia conduce a liquidar los intereses que se deben a la tasa que percibe el Banco de la Nación Argentina en sus operaciones ordinarias de descuento a treinta días desde la fecha de la mora y hasta su efectivo pago" (Dres. Gandur –dis. parcial – Goane – dis. parcial – Sbdar – Posse – Pedernera).

En su mérito, y en base a lo dispuesto por el art. 768 del Código Civil y Comercial de la Nación, esta vocalía considera que deviene razonable la aplicación de dicha tasa para actualizar el monto adeudado por la parte demandada SUR CONTACT CENTER SA (hoy AEGIS ARGENTINA SA), desde que las suma es debida, esto es desde el 16/11/11 (fecha del vencimiento de la ilación cursada por la actora obrante a fs. 23) hasta a su efectivo pago. Así lo declaro.

#### PLANILLA:

Juicio: Soria Cecilia Natalia c/ Sur Contact Center S.A. y otroEgreso:  
21/09/2011Remuneración s/ rbo fs. 64 - Agosto 2011Conceptos remunerativos\$ 1.835,63Conceptos no remunerativos\$ 614,43Total\$ 2.450,061) Art. 80 LCT \$ 2.450,06 x 3 meses\$ 7.350,18 Total \$ rubros 1) al 27/09/2011\$ 7.350,18 Tasa activa BNA 149,71%\$ 11.003,86 Total \$ rubros 1) al 28/02/2018\$ 18.354,04Reexpresión demanda para cálculo honorarios Total \$ demanda al 27/09/2011\$ 64.994,17 Tasa activa BNA 149,71%\$ 97.301,91 Total \$ demanda reexp. al 28/02/2018\$ 162.296,08

#### COSTAS:

Atento al resultado de la presente demanda, estimo razonable distribuir las costas de las siguiente manera: la parte actora soportará la totalidad de las costas correspondientes a la acción intentada en contra de TELEFÓNICA Con respecto a la demanda entablada en contra de SUR CONTACT CENTER SA (hoy AEGIS ARGENTINA SA), soportará el 80% de la totalidad de las costas, debiendo dicha demandada soportar el 20% restante. (cfr. Art. 49 del CPL y Arts. 105 y 108 del CPCCT supletorio respectivamente). Es mi voto.

#### HONORARIOS:

Corresponde en esta oportunidad regular los honorarios de los profesionales intervinientes en la presente causa, conforme lo prescribe el art. 46 inc. b de la ley 6.204.

Atento al resultado arribado en la litis, en especial a la imposición de las costas y al rubro por el que progresa la demanda, resulta aplicable el art. 50 inc. 2 de la ley citada, por lo que se toma como base regulatoria el monto actualizado de la demanda según planilla precedente (\$162.296,08), reducido a un 60%, lo que equivale a la suma de \$97.377,64.

Determinada la base regulatoria y teniendo en cuenta la calidad jurídica de la labor



desarrollada por los profesionales que intervinieron en el proceso, el éxito obtenido, el tiempo transcurrido en la solución del pleito y lo dispuesto por los arts. 14; 15; 39; 43 y ccdtes. de la ley N° 5480, con los topes y demás pautas impuestas por la ley 24.432 ratificada por la ley provincial N° 6.715, se regulan los siguientes honorarios:

1) A las letradas IRMA AZUCENA SALINA y JUANA ROSA PEÑALVA por su actuación en la causa por la parte actora, por las tres etapas del proceso de conocimiento, en doble carácter y en forma conjunta, en la suma de \$6.037,41 para cada una de ellas ( $\text{base} \times 6\% \times 55\% / 2 = \$12.074,82$ ) conforme art.12 de la Ley 5.480, monto que respeta el mínimo establecido por el art. 38 in fine de la misma ley. Por la reserva de fs. 328/329 (recurso de revocatoria) en la suma de \$1.207,48 para cada letrada ( $\text{base} \$12.074,82 \times 20\% = \$2.414,96 / 2$ ) de acuerdo a la escala del art. 59 de la ley 5.480.

Por la reserva de fs. 388/389 (oposición a la prueba) en la suma de \$603.74 para cada letrada ( $\text{base} \$12.074,82 \times 10\% = \$1.207,48 / 2$ ) de acuerdo a la escala del art. 59 de la Ley 5.480.

2) Al letrado JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ, por su actuación en la causa por la parte demandada SUR CONTACT CENTER SA, por dos etapas y media del proceso de conocimiento, (contestación de demanda, ofrecimiento de prueba y alegatos), el doble carácter, en la suma de \$15.093,52 ( $\text{base} \times 12\% + 55\% / 3 \times 2,5$ ). Por la reserva de fs. 328/329 (recurso de revocatoria) en la suma de \$1.509,35 ( $\text{base} \times 10\%$  de la escala del art. 59 de la ley 5480).

Por la reserva de fs. 388/389 (oposición a la prueba) en la suma de \$1.509,35 ( $\text{base} \times 10\%$  de la escala del art. 59 de la ley 5480).

3) Al letrado EDUARDO ENRIQUE PALACIO (H), por su actuación en la causa por codemandada TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA, por una etapa del proceso de conocimiento, en el carácter de apoderado, en la suma de \$7.546,76 ( $\text{base} \times 14\% + 55\% / 3 \times 1$ ).

Es mi voto.

VOTO DE LA VOCAL CONFORMANTE MARÍA DEL CARMEN DOMINGUEZ:

Por compartir los fundamentos vertidos por el Vocal Preopinante, emito mi voto en igual e idéntico sentido. Es mi voto.

Por el acuerdo arribado, la Sala I° de esta Cámara del Trabajo,

RESUELVE:

I.- ADMITIR PARCIALMENTE LA DEMANDA deducida por Cecilia Natalia Soria – DNI 33.163.856, domiciliada en Pasaje Belisario López n° 1.182 de esta ciudad Capital, en contra de SUR CONTACT CENTER SA – AEGIS ARGENTINA SA – CUIT 30-70984936-7, con domicilio sito en calle Juan Bautista Alberdi n° 165 de San Miguel de Tucumán. Condenar a dicha demandada a pagar a la actora la suma de \$18.354,04 (pesos dieciocho mil trescientos cincuenta y cuatro con cuatro centavos), en concepto de indemnización art. 80 de la LCT (art 45 de la Ley 25.345) y a entregarle el certificado de trabajo previsto en la misma norma, en el plazo de diez (10) días de quedar firme la presente resolución. RECHAZAR la demanda por cobro de pesos en concepto de: diferencias de haberes de julio de 2010 a agosto de 2011, diferencias SAC 2do. semestre/2010 y SAC 1° semestre/2011, diferencia días trabajados en septiembre de 2017, diferencia de indemnización por antigüedad, diferencia indemnización sustitutiva de preaviso, diferencia integración mes de despido, diferencia de vacaciones no gozadas y diferencia de SAC/vacaciones no

gozadas, multas arts. 1 y 2 de la Ley 25.323, art 132. bis de la LCT, y ABSOLVER a SUR CONTACT CENTER SA – AEGIS ARGENTINA SA –CUIT 30-70984936-7 de tales rubros, de acuerdo a lo considerado.

II.- DECLARAR abstracto el planteo de prescripción de la acción por cobro de diferencias salariales, opuesto por la demandada SUR CONTACT CENTER SA, de acuerdo a lo tratado.

III.- OPORTUNAMENTE, hágase entrega a la actora de la certificación de servicios y remuneraciones acompañada a la causa como documentación original, en mérito a lo tratado.

IV.- RECHAZAR LA DEMANDA interpuesta por Cecilia Natalia Soria –DNI 33.163.856, domiciliada en Pasaje Belisario López n° 1.182 de esta ciudad Capital, en contra de TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA, con domicilio en Av. Ingeniero Huergo n° 723, Planta baja, Ciudad Autónoma de Bs. As. y ABSOLVERLA de los rubros diferencias de haberes de julio de 2010 a agosto de 2011, diferencias SAC 2do. semestre/2010 y SAC 1° semestre/2011, diferencia días trabajados en septiembre de 2017, diferencia de indemnización por antigüedad, diferencia indemnización sustitutiva de preaviso, diferencia integración mes de despido, diferencia de vacaciones no gozadas y diferencia de SAC/vacaciones no gozadas, multas arts. 1 y 2 de la Ley 25.323, art 132. bis de la LCT, multa art. 45 de la Ley 25.345 y de la obligación de entregar el certificado de trabajo del art. 80 de la LCT, en mérito a lo considerado.

V.- COSTAS conforme fueron tratadas.

VI.- HONORARIOS: regular honorarios a la letrada IRMA AZUCENA SALINA por su actuación conjunta en la causa principal, por la parte actora, en la suma de \$6.037,41 (pesos seis mil treinta y siete con cuarenta y un centavos); por la reserva de fs. 328/329 en la suma de \$1.207,48 (pesos mil doscientos siete con cuarenta y ocho centavos) y por la reserva de fs. 388/389 en la suma de \$603.74 (pesos seiscientos tres con setenta y cuatro centavos). A la letrada JUANA ROSA PEÑALVA por su actuación conjunta en la causa principal, por la parte actora, en la suma de \$6.037,41 (pesos seis mil treinta y siete con cuarenta y un centavos); por la reserva de fs. 328/329 en la suma de \$1.207,48 (pesos mil doscientos siete con cuarenta y ocho centavos) y por la reserva de fs. 388/389 en la suma de \$603.74 (pesos seiscientos tres con setenta y cuatro centavos). Al letrado JAVIER LOPEZ DOMINGUEZ, por su actuación en la causa principal por la demandada SUR CONTACT CENTER SA, en la suma de \$15.093,52 (pesos quince mil noventa y tres con cincuenta y dos); por la reserva de fs. 328/329 en la suma de \$1.509,35 (pesos mil quinientos nueve con treinta y cinco centavos) y por la reserva de fs. 388/389 en la suma de \$1.509,35 (pesos mil quinientos nueve con treinta y cinco centavos). Al letrado EDUARDO ENRIQUE PALACIO (H), por su actuación en la causa por codemandada TELEFÓNICA DE ARGENTINA SA, en la suma de \$7.546,76 (pesos siete mil quinientos cuarenta y seis con setenta y seis centavos), en mérito a lo considerado.

VII.- COMUNÍQUESE a la caja de previsión de Abogados y Procuradores de la provincia de Tucumán (Ley 6059).

VIII.- INTERESES según lo tratado.

IX.- PLANILLA FISCAL, oportunamente practíquese y repóngase.

HÁGASE SABER Y REGÍSTRESE.

ROGELIO ANDRÉS MERCADO  
DOMINGUEZ

MARÍA DEL CARMEN

ANTE MI: ROXANA ANDREA D'AMATO